

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por D. Juan Ruiz, contra el cobro que le hace el Receptor de rentas de San Juan Bautista, de la cantidad de cuatrocientos veintidos pesos treinta y dos centavos, como importe de los derechos causados conforme á la ley del Estado de 16 de Diciembre de 1873, por las mercancías importadas por el Pailebot "Edvin Palmer."

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

Por espaciosas que sean las razones y respetables las autoridades alegadas y que puedan alegarse en pró del derecho de consumo impuesto sobre el de importacion por la ley del Estado de 16 de Diciembre de 1873, á todas las mercancías extrangeras que se introduzcan en él, y de que se queja D. J. Ruiz, mientras la imposición ó el establecimiento de ese cobro no se presente acompañado de la constancia respectiva de haberse llenado el requisito que para poder establecerlo exige á los Estados el artículo 112 de la Constitucion de la República en su fraccion 1ª, ó no se declare por quien corresponda, que es otra la inteligencia que debe darse á esa fraccion, el Promotor fiscal no puede pedir otra cosa que el cumplimiento de ese artículo, por que á esto le obliga el 126 de la misma Constitucion, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones ó leyes de los Estados, y ni la derogacion de los arts. 19 y 83 del Arancel de Aduanas marítimas, ni la autorizacion al ejecutivo para reformar el mismo Arancel, añaden ni quitan nada al texto constitucional.

Por tanto, el Promotor, limitando su pedimento á lo que por el actor está limitado su ocurso, y considerando invadida la esfera de la autoridad federal en el art. 112 de

la Constitucion de la República fraccion 1ª, y el caso comprendido en la 3ª, art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, conefuye pidiendo se conceda á D. Juan Ruiz, el amparo que solicita.

San Juan Bautista, 10 de Junio de 1874.
—*Lic. Cordera.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Junio 16 de 1874.—*Gabriel Sosa,* secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

República Mexicana. Juzgado de Distrito de Tabasco. San Juan Bautista, Junio 13 de 1874.—Visto el escrito de 25 del próximo pasado que encabeza estas diligencias, en el cual el C. Manuel Martínez Guido, á nombre de su principal D. Juan Ruiz, entabla demanda de amparo contra la Receptoría de rentas de este Partido, por el cobro de cuatrocientos veintidos pesos treinta y dos centavos, á título de derechos causados por mercancías importadas por el pailebot americano "Edvin Palmer," segun el decreto de 16 de Diciembre de 1873, fundando el peticionario su accion, primero, en las fracciones 1ª y 2ª art. 112 tít. 5º de la Constitucion general; segundo, en el art. 124 del tít. 1º de la misma; el informe en artículo del C. Receptor, con el pedimento relativo del C. Fiscal; el último ocurso del C. Juan Ruiz, en que ratificando la demanda del Sr. Guido, reduce su fundamento á la fraccion 3ª art. 1º de la ley reglamentaria del recurso de amparo, en virtud de que la exaccion reclamada proviene de un decreto del Estado, que viola el art. 112 de la Constitucion nacional; el auto de 3 del corriente en que se decreta la suspension inmediata; el informe de la Receptoría de fojas 8 á 11 esforzándose á impugnar la procedencia del amparo, y á establecer la constitucionalidad del decreto de 16 de Diciembre último; visto en fin el pedimento fiscal y lo demás del caso, el Tribunal considerará:

Primero: La cuestión de si la acción de amparo se funda ó nó en la violación de una garantía verdaderamente individual, es de todo punto inútil. Desde el principio se ha presentado el caso como comprendido en las fracciones 1ª y 3ª art. 101 de la Constitución nacional, y en las mismas del art. 1º de su reglamento de 20 de Enero de 1869, y el último escrito del Sr. Ruiz, fija en esta última fracción el fundamento de su demanda. Según ella, hay lugar al amparo por leyes ó actos de las autoridades de los Estados, que invaden la esfera de la autoridad federal; no hay pues, para que empeñarse en el exámen de si ésta es ó deja de ser una garantía individual, aunque bien se comprende que desde el momento en que una ley ó acto cualquiera de autoridad se trae á exámen por vía de amparo, no se considera mas que en sus efectos, respecto del individuo que reclama. La parte actora ha alegado que el decreto del Estado de 16 de Diciembre de 1873, en cuya virtud se le cobran los derechos causados por la importación del "Palmer" es anticonstitucional, por que contraviene á la prohibición que la fracción 1ª art. 112 de la Constitución nacional hace á los Estados, de establecer derechos de tonelaje ú otro alguno de puerto, y de imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones ó exportaciones, invocando por tanto el amparo de la Justicia de la Unión contra los efectos de esta ley, tocante á su persona.

No resta pues, mas que examinar si la ley reclamada contraviene al Pacto federal.

Segundo: Para cerciorarse de que esta ley tiene tal carácter, basta fijar la consideración en el hecho, que según ella, causa la contribución que establece. Este no es otro que la simple introducción en el Estado de los frutos ó efectos extranjeros ó nacionalizados; y como esta introducción no se verifica mas que por el puerto, es indudable que el impuesto recae directamente sobre la importación, y entra naturalmente en la prohibición constitucional. El nombre ar-

bitrario dado á la contribución por el decreto que la establece, nada arguye tocante á su naturaleza, lo cual, en riguroso análisis, en nada se diferencia de la de los derechos de importación que cobra el erario federal conforme al arancel vigente. En tal virtud, el Tribunal, no convencido por los razonamientos en que se difunde la Receptoría, no vacila en considerar el caso comprendido en la fracción 3ª art. 101 de la Constitución nacional, y 3ª art. 1º de la reglamentaria de 20 de Enero de 1869, por cuyos fundamentos legales decretó:

Primero: La Justicia de la Unión ampara y protege al C. Juan Ruiz, contra el cobro de cuatrocientos veintidos pesos treinta y dos centavos que le hace la Receptoría de rentas, como derechos causados por introducción de efectos extranjeros en el Pailebot "Palmer," conforme al decreto del Estado de 16 de Diciembre último, con agregación del adicional federal.

Segundo: Sacadas las copias de estilo, remítanse los autos á revisión.

Lo proveyó el C. Jic. Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado; y firma conmigo su Escribano que doy fé.—*L. Correa.* Ante mí,—*Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Junio 16 de 1874.—*Gabriel Sosa,* secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 17 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por D. Juan Ruiz, contra el cobro que le hace el Receptor de rentas de San Juan Bautista, de la cantidad de cuatrocientos veintidos pesos treinta y dos centavos, como importe de los derechos causados conforme á la ley del Estado de 16 de Diciembre de 1873, por las mercancías importadas por el Pailebot "Edwin Palmer", con cuyo cobro, según ma-

nifiesta el quejoso, se viola la garantía consignada en la fracción 1ª del artículo 112 de la Constitución federal; visto el fallo pronunciado por el Juez de Distrito, con cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Por sus mismos legales fundamentos se confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Tabasco en 13 de Junio último, que declara: que la Justicia de la Unión protege y ampara al C. Juan Ruiz, contra el cobro de cuatrocientos veintidos pesos treinta y dos centavos que le hace la Receptoría de rentas como derechos causados por introducción de efectos extranjeros en el Pailebot "Palmer", conforme al decreto del Estado de 16 de Diciembre último, con agregación del adicional federal.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*S. Guzmán.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*E. Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 25 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

COMPETENCIA

Suscitada entre el Juez 1º de Distrito de México y el 1º constitucional de Querétaro, para conocer de los autos seguidos por la Señora Doña Dolores Tejeda de Ecala, sobre que se declare prescrita la acción hipotecaria que gravita sobre la hacienda nombrada "Yurica el Grande."

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal interino dice: que cumpliendo con lo acordado por esta Sala el 16 de Abril próximo pasado, expone lo siguiente: que el Juzgado 1º de Distrito de esta Capital sostiene la competencia que el 3º de lo civil, también de esta Capital, inició al alcalde 1º constitucional de la Ciudad de Querétaro, en los autos á que se refiere el extracto de las constancias siguientes.

Con fecha 1º de Julio del año próximo pasado, la Señora Doña Dolores Tejeda de Ecala, presentó un escrito ante dicho Juez 3º de lo civil por su hija Doña Elena, menor de edad, exponiendo: que esta menor había recibido por herencia paterna, la hacienda de "Yurica el Grande," sita en el Estado de Querétaro, libre de todo gravámen, según se expresa en el testamento que acompañó: que con esta calidad fué adquirida dicha finca y poseída durante mas de treinta años por su esposo D. Eulogio López Ecala, hasta que falleció en 1861, y desde esa fecha hasta la presente ha sido poseída del mismo modo por su referida hija Doña Elena, sin que ni en el primer periodo de tiempo ni en el segundo, se hubiera presentado persona alguna á cobrar réditos ó á exigir el pago de algun capital que reconociera la expresada hacienda: que siendo ciertos estos hechos, la ha sorprendido mucho la denuncia hecha en Querétaro de un capital oculto de cinco mil pesos, que se dice reporta la refe-